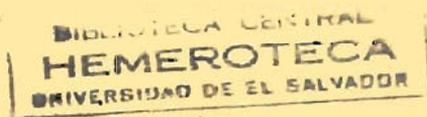


1985

EL CONTINUADO RESURGIMIENTO
DE LA LUCHA POLITICA DE LAS
CLASES TRABAJADORAS
SALVADOREÑAS

CUADERNOS
DE
DIVULGACION
UNIVERSITARIA

No. 2



SECRETARIA DE COMUNICACIONES

1985: EL CONTINUADO RESURGIMIENTO DE LA LUCHA POLITICA
DE LAS CLASES TRABAJADORAS SALVADOREÑAS

MARIO LUNGO UCLES

DICIEMBRE 85 - ENERO 86

- 009112
- A. Introducción: los años anteriores.
 - B. El acentuado deterioro de las condiciones de vida de las clases trabajadoras.
 - C. Las principales acciones y sus características.
 - D. Conclusiones.



A. Introducción: los años anteriores

En un trabajo previo ("El resurgimiento de la lucha política de masas y sus nuevas manifestaciones en El Salvador: 1983-1984"), sosteníamos que el repliegue de la lucha política de las masas salvadoreñas, efectivamente ocurrido entre 1981 y 1983, fue un proceso más complejo que lo que aparecía en la percepción inmediata del espacio político del país.

Partíamos de que era indispensable, para captar el movimiento de la realidad en toda su profundidad, el análisis de las formas particulares que en los distintos momentos del actual proceso revolucionario salvadoreño asume la contradictoria relación entre la lucha política de las masas y la lucha armada revolucionaria.

De que esos años difíciles constituyeron una transición dura y opaca, como muchas transiciones, hacia nuevas formas de organización y lucha de la actividad política de las masas populares salvadoreñas que respondieran a los tiempos en que la lucha militar pasa a ser la forma principal y determinante (sin que esto conduzca a apreciaciones equivocadas al apoyarse en una mecánica división entre lo político y lo militar). Mencionábamos los lineamientos políticos que permitieron hacer de este repliegue un salto

hacia adelante: la vuelta al desarrollo de formas clandestinas de lucha, la elaboración e impulso de plataformas reivindicativas propias a cada sector popular combinando lo económico con lo político, el apoyo a las reivindicaciones de la pequeña burguesía, el esfuerzo por dar a conocer a las masas urbanas y rurales en las zonas controladas por las fuerzas armadas gubernamentales los avances de la guerra popular revolucionaria a la vez que se combatía el bandolerismo y se imponía el respeto a los bienes individuales por parte de las fuerzas revolucionarias, la colocación de importantes esfuerzos en la construcción del poder popular en las zonas de control del FMLN (que constituye una nueva forma de lucha política de las masas populares todavía no captada plenamente en algunos análisis), etc.

Todo lo anterior, y esto queremos reafirmarlo con fuerza, manteniendo un profundo respeto por la autonomía de las organizaciones que han conducido este resurgimiento.

Señalábamos también en este trabajo anterior, algunas conclusiones que debemos repetir para una mejor comprensión de lo ocurrido en este ámbito durante 1985. Ellas eran: su correcta inserción y articulación dentro de una estrategia revolucionaria de carácter global, la necesaria pero diferenciada complementación con la lucha militar revolucionaria (posibilitada por la inserción mencionada), el surgimiento de nuevas formas de autodefensa de esta forma de lucha popular (esta vez ante todo con la resistencia y la solidaridad sindical y gremial), y por último, el surgimiento de nuevos dirigentes populares de masas.

Durante 1985 el resurgimiento de la lucha política de las masas salvadoreñas ha continuado ampliando el espacio de la lucha política en el país. Este proceso es claro al hacer el análisis del año transcurrido si éste no se limita a los aspectos puramente cuantitativos (aunque en esta dimensión el avance también ha sido continuo), si el análisis se detiene en aquellos momentos y en aquellas acciones que señalan cambios cualitativos, si se coloca la atención en los hechos nuevos y en las nuevas formas, si se enmarca correctamente esta lucha política de masas en las modalidades específicas que la guerra popular revolucionaria ha desarrollado durante este último año.

Es así que el esfuerzo analítico debe ser dedicado a la reconstrucción de aquellas relaciones subyacentes, no explícitas, que no aparecen inmediatamente, pero que son las que permiten una comprensión de los procesos reales en este ámbito. Fenómenos como el proceso electoral que cubrió los espacios noticiosos durante el primer trimestre del año, la captura de la hija de Duarte por parte del FMLN, las nuevas medidas cambiarias, el alza del costo de los productos de la canasta básica, los conflictos del trans-

porte colectivo, la crisis del sector de la construcción y la vivienda, el asalto por parte de tropas gubernamentales a las instalaciones del hospital general del Seguro Social, la presencia del dirigente Héctor Recinos en el congreso de FENASTIRAS, el paro para exigir la libertad de los hijos de un dirigente sindical, se entrelazan con otros hechos ajenos aparentemente a la lucha política de las masas salvadoreñas, y cuya lógica interna es necesario tratar de descubrir para hacer un balance correcto.

Los años anteriores han visto el desarrollo de procesos que han dado ya una configuración diferente al panorama político del país, por lo que el análisis de lo ocurrido durante estos años, y particularmente durante el último que ocupa nuestra atención en este trabajo, no puede obviarlos. Señalemos algunos.

En primer lugar la guerra popular revolucionaria se ha prolongado en El Salvador, enfrentando en el plano militar unas nuevas fuerzas armadas gubernamentales (cuyas características hemos descrito en otros trabajos), a un verdadero ejército revolucionario que ha logrado construir su retaguardia interna. En segundo lugar, en el plano político nacional, se ha constituido un gobierno civil a través de tres procesos electorales restringidos lo que ha dado una cierta e importante legitimidad al proyecto contrarrevolucionario, la consolidación y la unidad interna de las fuerzas populares se ha acelerado sustancialmente mostrando su fortaleza política. En cuarto lugar, es cada día más evidente que la economía salvadoreña se ha mantenido en razón de una voluminosa ayuda norteamericana, y aunque su situación pueda mantenerse estable relativamente mientras esta ayuda continúe, el modelo genera contradicciones insuperables a mediano plazo. En quinto lugar por último, la administración Reagan ha logrado reconstruir la hegemonía global norteamericana lo que se traduce en el cambio, en la correlación de fuerzas en la región que estamos presenciando.

B. El acentuado deterioro de las condiciones de vida de las clases trabajadoras

Que las condiciones de vida de las clases trabajadoras salvadoreñas, urbanas y rurales, no ha cesado de deteriorarse es una cuestión muy clara, a pesar de que algunos indicadores macroeconómicos expresen tendencias positivas. Las razones de esta contradictoria situación son bien conocidas, pero debemos acercarnos aunque sea brevemente al caso salvadoreño para tratar de observar sus particularidades. Así, aunque la tasa de crecimiento del PIB se ha recuperado del momento de su máxima caída en 1980 (-8.7% en ese año contra +1.5% en 1984), ocurriendo lo mismo en la relación PIB por habitante (-10.6% en 1980 y +0.8% en 1984), esto no debe hacernos olvidar que los niveles actuales apenas llegan a igualarse, en términos reales, a

los alcanzados en 1960, y que la población ha disminuido drásticamente a causa de la guerra.

Sectorialmente las dos actividades principales del país: el cultivo del café y el algodón, disminuyeron sensiblemente, al igual que el sector de la construcción (la producción de café por ejemplo disminuyó de 4.5 millones de quintales en 1979 a 2.7 millones en 1984, calculándose solamente una producción de 2.2 millones para 1985 según la Asociación Cafetalera de El Salvador), teniendo como consecuencia el incremento del desempleo abierto en el país, calculado oficialmente en más del 50% de la población económicamente activa, duplicándose lo estimado para 1980 y considerando que esta cifra es bastante más baja que la realidad.

No debemos, sin embargo, desestimar los efectos positivos en el control de esta tendencia regresiva producidos por la voluminosa asistencia financiera de los Estados Unidos (aproximadamente 400 millones de dólares anuales durante los dos últimos años, equivaliendo en 1984 al monto del déficit del gobierno central). El detalle de la misma es el siguiente:

<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1984*</u>	<u>1985**</u>	<u>TOTAL</u>
113.6	182.2	241.9	212.4	113.3	310.7	1174.1

* suplemento

** cantidad aprobada a junio del 85, sin eventuales suplementos.

fuentes: Providing effective economic assistance to El Salvador and Honduras. Report by the Controller General for the U.S., July 85; Sustaining a Consistent Policy in Central America. Report to the President from the Secretary of State, April 85 (reproducido en "Estados Unidos-Centro América" # 4, boletín de análisis e información, CINAS, julio-agosto de 1985).

La inversión privada creció también en un 4% durante 1984, lo que no es ajeno a este flujo pero cuyo destino real debe ser cuidadosamente analizado.

La política económica del primer año del gobierno de Duarte se centró en el impulso a la demanda interna y el estímulo a la oferta global de bienes y servicios. Venos así incrementados los salarios, particularmente del sector público, que junto a un creciente flujo de transferencias privadas de salvadoreños radicados en los Estados Unidos principalmente, produjo un incremento en el consumo. Debemos señalar, sin embargo, el carácter parcial de los efectos de este incremento dados los niveles de desempleo y la histórica desigualdad en la distribución del ingreso en el país. Por otra parte, y como veremos más adelante, el aumento salarial de los empleados públicos se logró a costa de duras luchas en las que los paros y las

huelgas han tenido una posición relevante. Tampoco debemos olvidar que en el incremento del consumo global juega un importante papel el consumo público, uno de cuyos principales componentes es el gasto en defensa y seguridad.

Por el lado de la oferta, las políticas crediticias y la disponibilidad de divisas permitió un crecimiento del 2% en bienes y servicios mientras el volumen total de las importaciones aumentó en 4% (*).

Este panorama de leve incremento de los indicadores macroeconómicos debe ser comparado con sus efectos reales en las condiciones de vida de las clases trabajadoras antes de hablar de la reactivación en abstracto de la economía salvadoreña.

(*) informe de la CEPAL: "Notas para el desarrollo económico de América Latina y el Caribe, 1984, El Salvador".

Detengámonos antes unos momentos en observar las características de la ayuda norteamericana. Ella asume principalmente la forma de transferencias de dinero en efectivo para apoyar el sector externo y reequilibrar la balanza de pagos (65%). Luego asume la forma de asistencia alimentaria, a través de ventas subsidiadas y donaciones de alimentos (15%), que es ante todo entrega de alimentos para su venta en el mercado. Finalmente asume la forma de financiamiento de programas de desarrollo (20%), especialmente infraestructura física. El problema, como se señala en el boletín del CINAS, es que a pesar de la velocidad en la entrega que caracteriza a esta asistencia financiera se necesitan cada vez más recursos para equilibrar la balanza de pagos y el presupuesto, a la vez que la entrega de alimentos para ventas subsidiadas se convierte, al no llegar a los sectores populares, en otra forma de transferencia en efectivo, por lo que esta ayuda ha servido ante todo para sostener la guerra, mantener bajo relativo control a la oposición de los grupos económicos oligárquicos al dotarlos de divisas y posibilitar la continuada fuga de capitales, y para equilibrar el presupuesto, sin favorecer a las clases trabajadoras mientras crea falsas expectativas sobre la recuperación de la crisis económica.

Conviene decir también algunas palabras sobre el problema de la deuda externa. Los datos son los siguientes:

	MONTO DE LA DEUDA EXTERNA (millones de colones)					
	1979	1980	1981	1982	1983	1984
pública	996.2	1187.5	1632.0	2039.4	2486.5	2714.0
del BCR*	481.5	1180.1	1503.0	1751.9	1778.6	1695.1
privada	869.3	572.9	541.9	483.2	491.1	464.1
TOTAL	2347.0	2940.5	3676.9	4274.5	4726.2	4873.7

fuentes: *Banco Central de Reserva

Los datos revelan un incremento de la deuda, pero lo que es más importante, una modificación en su estructura. La del sector público pasa del 42% al 55% del total en estos años, la del BCR se triplica pasando del 21% al 35%, y la privada se reduce a la mitad disminuyendo del 37% al 10%, lo cual explica que el incremento ha servido ante todo para cubrir el déficit fiscal y sostener los gastos de guerra. Es claro entonces que este endeudamiento, así como la ayuda norteamericana no ha generado empleos ni ha servido para incrementar salarios o mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Veamos a continuación la distribución del presupuesto en 1979 y en 1984 para comprobar lo dicho:

	<u>1979 (%)</u>	<u>1984 (%)</u>
DEFENSA	20.6	43.4
EDUCACION	31.0	22.0
SALUD	15.0	11.0
AGRICULTURA	5.0	3.0
OBRAS PUBLICAS	8.0	5.0

fuerite: BCR

Lo que se reafirma al conocer el incremento de los precios durante el primer semestre de 1985, que muestra que el nivel de vida (que más bien es de sobrevivencia), entre las clases trabajadoras no cesa de deteriorarse:

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (diciembre 1978=100)

	diciembre 84	julio 85	incremento
alimentación	230.74	259.67	28.93
vestuario	227.83	271.94	44.11
vivienda	202.69	275.26	72.57
misceláneos	194.26	213.70	19.44
general	217.30	256.01	38.71

fuerite: BCR

Cifras que confirman la tendencia inversa entre precios y salarios entre 1980 y 1984 que aparece a continuación:

	INDICE DE PRECIOS*	SALARIOS MINIMOS REALES*	
		agropecuario	industria y servicios
1980	128	83	116
1981	146	72	108
1982	164	65	96
1983	185	65	96
1984	207	58	97

* en dólares

fuerite: CEPAL, informe citado

Bastan los datos anteriores, dado el objetivo de este trabajo, para ver el retroceso real de la economía salvadoreña durante los últimos años, cuyo origen tiene una doble causa: la crisis económica que ha afectado a todo el sistema capitalista por un lado, y el desarrollo de la guerra popular revolucionaria por el otro. Al combinarse, y más bien subordinarse esta crisis económica a la crisis política global del país (pasando a un segundo plano), la administración norteamericana se ha visto obligada a convertir a El Salvador en el quinto receptor mundial de su ayuda, introduciendo variantes en el funcionamiento normal de la economía, con profundas consecuencias en las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Es esto tan claro que la propia Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), expresaba a raíz de las disposiciones cambiarias de mediados del año (y sobre las que volveremos adelante), lo siguiente: (*)

"el encarecimiento de los productos de consumo en general no se debe a decisiones arbitrarias de los comerciantes e industriales, sino a la constante pérdida del valor de la moneda, y por eso el fenómeno de la elevación de los precios tendrá que producirse inevitablemente".

El análisis de las luchas políticas de las masas, y específicamente del sector sindical y gremial debe considerar esta situación.

(*) CCIES, "Carta Informativa" # 127, julio de 1985.

C. Las principales acciones y sus características

Las elecciones para integrar la nueva Asamblea Legislativa del 17 de marzo, y en las que el PDC alcanzara la mayoría, ocuparon buena parte del espacio político salvadoreño durante el primer trimestre de 1985. Esto no quiere decir, sin embargo, que la lucha de las clases trabajadoras desapareciera del mismo. Ya el 17 de enero la contradicción que estaba latente entre el gobierno y los cooperativistas emergerá cuando la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador (COACES), se manifiesta por las calles de la capital exigiendo a la vez una política crediticia que los favorezca como la reanudación del diálogo con el FMLN-FDR, la que se vuelve a repetir el 8 de marzo con la participación esta vez también de la Asociación Nacional de Campesinos y la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, que se incorporan como observadores a COACES (integrada por la Federación de Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria de El Salvador, la Federación de Cooperativas de la Industria del Transporte de El Salvador y la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador).

Es interesante señalar cómo la estructuración del movimiento cooperativo en el país, que se inicia desde la década pasada y adquiere importancia en la presente, sigue el mismo modelo de las organizaciones sindicales: sindicato-federación-confederación, y que en su auge reciente subyace la intención, no exenta de contradicciones, de la democracia cristiana por crearse una base social y política de apoyo, y de las administraciones norteamericanas recientes por neutralizar el movimiento popular de masas.

Estas movilizaciones de calle de los cooperativistas prolongan las diferencias y divisiones en el seno de la Unidad Popular Democrática (UPD), principal apoyo de masas del gobierno de Duarte, ante el fracaso del llamado "Pacto Social" suscrito entre estos sectores sociales y el PDC a raíz de la llegada de este partido al gobierno (diferencias que produjeron el surgimiento de la Central de Trabajadores Democráticos, CID, a finales de 1984).

El conflicto llega a su punto máximo cuando Duarte veta el 12 de marzo el proyecto de "Ley General de Cooperativas", presentado por COACES y aprobado por la Asamblea Legislativa el 21 de febrero, que contara además con el apoyo de la Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria (FESACORA), y de la que el propio presidente del estatal Instituto Salvadoreño de Fomento Agropecuario (INSAFOCOOP), Jorge Ruiz Camacho, alto dirigente de la UPD, dijera que permitiría la incorporación al cooperativismo de los trabajadores de seguros, de los mineros, artesanos, comerciantes, etc. Duarte argumenta que la ley violaba la constitución al otorgar poder a las cooperativas para participar en las decisiones del Estado y conceder excesivos privilegios de tipo fiscal, y exhorta a los cooperativistas a no dejarse manipular por los políticos de extrema derecha. Se habla mucho en esos días de que la posición del presidente podría restarle votos en las elecciones que se avecinaban. Sin embargo, y contra estos pronósticos, la democracia cristiana alcanza la mayoría de los puestos para la Asamblea Legislativa. Estas elecciones y su resultado muestran la extrema complejidad y movilidad del panorama político del país. Su análisis desborda, sin embargo, los límites de este trabajo.

El 22 de marzo más de veinte mil cooperativistas vuelven a desfilar por las calles de San Salvador celebrando el primer aniversario de COACES y exigiendo la aprobación de la ley de cooperativas.

Como decíamos antes, estos primeros meses transcurren dominados por el proceso electoral en el plano político interno. Numerosas huelgas continúan. Por otra parte, el resurgimiento de las luchas de las clases trabajadoras iniciado en 1983 y ampliado sustancialmente durante 1984. Destaquemos los paros bancarios (Banco de Crédito Popular, CREDISA y Banco Salvadoreño), por la libertad de dirigentes de su gremio capturados y luego liberados y

la plataforma reivindicativa del Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM), hecho novedoso este último en el ámbito de las luchas populares en el país. Debemos mencionar también la toma del penal de Ilopango el 19 de febrero por parte de las reos políticas, con un saldo de tres baleadas pero que provocó la movilización externa de las asociaciones de apoyo, y la importante (por su significado estrictamente político), manifestación que el 24 de marzo conmemora el quinto aniversario del asesinato de Monseñor Romero.

Durante el segundo trimestre, especialmente a partir del mes de mayo, se comienza a incrementar el nivel de la lucha de las clases trabajadoras. Si en el mes de abril se registran 15 huelgas y paros, en mayo este número se elevó a 20, a lo que se sumó la movilización del primero de mayo, cuyos 15/20,000 participantes constituyen otra demostración de vencimiento del terror. A ella convocaron la Coordinadora de Solidaridad de los trabajadores (CIS), el Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM), y la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FESTRAS), a pesar de las amenazas del Ministerio del Trabajo.

Es en estos días que aparece con mayor claridad la contradicción entre el Partido Demócrata Cristiano y la AFL-CIO por el control de los miembros de la UPD, acelerada por la creación de la Central de Trabajadores Democráticos (CID), a finales de 1984 como lo señaláramos antes, y que gira en torno a la adscripción dentro de la "izquierda del PDC" de la UPD, y que se traduce en duplicidad de directivas en numerosos sindicatos y gremios miembros de esta última. Por otro lado, y a la par de esta lucha interna en el seno de la base social trabajadora gubernamental, se impulsa la creación o reactivación de sindicatos paralelos en las instituciones estatales en que los trabajadores se han mostrado más combativos, complejizando aún más el denso panorama sindical y gremial salvadoreño.

Estas contradicciones no impedirán al gobierno de Duarte atacar coordinadamente el auge reivindicativo de este mes expresado en los movimientos de los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), y del Ministerio de Educación, acusándolos a la vez de estar instrumentalizados por el FMLN. Es interesante observar que en las plataformas reivindicativas de los trabajadores del ISSS y de ANDA, aunque hay peticiones políticas como el cese del Estado de Sitio, en la de los primeros, y de apoyo a las luchas de otros sindicatos en ambas, no aparece la demanda por la continuidad del diálogo entre el FMLN-FDR y el gobierno. Este detalle recoge la evolución de las expectativas para lograr una solución política negociada a la guerra en el país (que continúa ampliándose a mayores zonas en casi todo el país), y la necesidad de protegerse contra los ataques gubernamentales de que las luchas sindicales y gremiales están dirigidas por el FMLN.

Contradictoriamente, en el momento en que pareciera que el gobierno de Duarte al lograr la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa consolidaría su poder, se ve enfrentado al movimiento laboral más fuerte desde que asumiera la presidencia (lo que en un análisis poco profundo constituiría otra paradoja más de la historia política reciente del país). Se constituye incluso un comité con la representación de al menos 12 sindicatos el que, acompañado de unos 4,000 manifestantes, y desafiando prohibiciones de las fuerzas armadas, marchan por la ciudad hasta la Asamblea Legislativa para dialogar con los diputados y tratar de solucionar la cadena de conflictos, lo cual no fue logrado.

Pero el hecho que marca definitivamente el carácter antipopular del gobierno de Duarte es el asalto a las instalaciones del Hospital General del Seguro Social el 2 de junio, por parte de las fuerzas armadas, que sólo lograron desalojar a los trabajadores, provocar muertos entre los mismos militares y producir pánico e indignación, sin lograr el reinicio de las labores. Esta acción, que demostró la inutilidad del plan gubernamental para controlar los movimientos reivindicativos en el sector público, lejos de aterrorizar a los trabajadores desató una ola de protestas que alcanzó incluso a la propia UPD, quien en una carta abierta a Duarte manifestó que esa actuación era similar a la de los antiguos gobiernos represivos, que ninguna excusa legalista podría borrar el daño cometido, que nadie creará que el movimiento de los trabajadores del ISSS es comunista, que el asalto es un irrespeto al Pacto Social, y que este error se debía a la ausencia de una política clara y definida del gobierno para el sector laboral.

A mediados de junio las luchas cobran un importante auge, destacándose el conflicto en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la persistencia de la demanda de los cooperativistas del sector agropecuario reformado, y la celebración de la XIX Asamblea General de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES), con la asistencia de delegaciones magisteriales de Europa y Estados Unidos, lo imposibilitó su represión. Debe destacarse también el prolongado conflicto de los trabajadores pesqueros iniciado en enero y no resuelto en esa fecha aún.

El 11 de junio se conoce el comunicado público de los trabajadores del Seguro Social donde dan a conocer los triunfos obtenidos en el paro que duró del 6 de mayo al 6 de junio a pesar del brutal ataque a las instalaciones del Hospital General el día 2, y el 10 y 13 del mismo mes los comunicados de los trabajadores del Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA, en que denuncian el ilegal despido de los dirigentes y un alto número de afiliados, y lo que es importante para comprender la evolución de la situación en el país, la denuncia detallada de la corrupción que ha sido llevada por el gobierno de Duarte hasta límites insostenibles (y que refle-

ja su percepción real de poder derrotar definitivamente a las fuerzas revolucionarias antes que su proyecto político se agote).

Es claro entonces que a partir del segundo semestre de este año estamos en presencia de un nuevo impulso en las luchas de los trabajadores salvadoreños. Es en este mismo mes también que el Ministerio de trabajo entrega a Duarte el discutido anteproyecto del nuevo Código de Trabajo para su presentación y aprobación por la Asamblea Legislativa, mientras el presidente insiste en que el país está en guerra y todo lo que se hace está relacionado con el fenómeno de la guerra, para oponerse a las reivindicaciones laborales, contradiciendo todo el discurso que se hace por otra parte sobre la virtual derrota de las fuerzas revolucionarias. Los meses finales del año confirmarán este nuevo impulso señalado.

Son estos días también los de la disputa alrededor de las disposiciones cambiarias que habíamos mencionado antes, el 18 de junio la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, señaló en un comunicado que las medidas cambiarias por la Junta Monetaria y el Banco Central de Reserva y que consistían entre otras medidas en la fijación del valor del dólar norteamericano en el mercado paralelo en 4.5 y 4.55 colones la compra y la venta respectivamente, tendrían por efecto inmediato la drástica elevación de precios de venta de todos los productos. La disputa se mantiene tal como lo vimos antes en el comunicado de mediados de julio y se reafirma en otro aparecido el 16 de agosto a raíz de la aprobación por la Asamblea Legislativa dominada por la democracia cristiana, sin conocimiento previo de la oposición y con dispensa de trámites, de tres decretos económicos entre ellos una reforma a la ley del régimen monetario. Observamos entonces que ante las demandas de las clases trabajadoras el actual régimen no puede presentar una posición monolítica por la irresoluble crisis de hegemonía en el interior del bloque dominante, cuya solución, como hemos sostenido en otros trabajos, sólo puede ser obtenida previa derrota estratégica de las fuerzas revolucionarias.

La situación no cesa de complicarse. En agosto estalla la crisis en el transporte colectivo cuando la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), decide incrementar las tarifas del transporte urbano en 60% y del interurbano en 50%, y que la oposición gubernamental provocaría el paro. El gobierno declara la inconstitucionalidad de la medida proyectada y amenaza con la militarización del servicio. Aunque este conflicto es controlado, (los empresarios aunque ceden en la negociación con el gobierno logran la adhesión de los cooperativistas del transporte neutralizando así parcialmente las protestas populares), estamos aquí ante la muestra del contradictorio efecto de las nuevas disposiciones cambiarias. Paralelamente surge a la luz el enorme problema de la vivienda cuando estimaciones oficiales informan que hay en el país casi 3 millones (de los 4.5

millones de habitantes que se estima se encuentran en el territorio nacional), sin vivienda o con ella en precarias condiciones. Esta situación se enmarca en la crisis del sector de la construcción, el cual según el BCR tuvo una disminución del 56% en el sector privado y del 29% en el sector público entre 1979 y 1983, y cuyo peso global dentro del PIB disminuyó 5% entre 1984 y 1983.

Esta situación explica en parte la aprobación de una Ley de Protección al Consumidor, que incluye la formación de una Comisión con participación de obreros y campesinos y que trabajaría sobre los costos reales de la canasta básica.

El tercer trimestre finaliza con la misma tendencia al auge reivindicativo. Desde el 9 de septiembre los empleados del Ministerio de Hacienda decretan un paro indefinido que recibe el apoyo de trabajadores de otros 7 ministerios y cuyo mayor impacto se verá durante los meses finales del año. Las movilizaciones desbordan el ámbito laboral con una manifestación claramente política el 15 de septiembre (día de la independencia nacional), cuando unos 5,000 trabajadores marchan "por la paz, el trabajo, la soberanía y la verdadera independencia", y un hecho que aunque no está asociado al movimiento laboral tendrá repercusiones más allá de él mismo: la captura de la hija de Duarte por parte del FMLN y su posterior canje, cuestión que sólo nos limitamos a señalar en este trabajo.

Octubre se inicia con la problemática del transporte aún vigente y AEAS y la Federación Nacional de Cooperativas de la Industria del Transporte de El Salvador (FENACTITES), efectúan marchas de protesta y paros parciales, mientras se presenta el proyecto de presupuesto para 1986 que registra un incremento del 8.4% pero que sigue siendo un presupuesto de guerra basado en un mayor endeudamiento externo, sin contemplarse en él incrementos salariales (una de las mayores demandas de los empleados públicos en huelga), aumento para la Universidad (otra de las mayores exigencias del momento), o subsidios para los empresarios del transporte.

Los trabajadores del sector público se oponen fuertemente al recientemente aprobado decreto # 162 que permite el traslado de personal de una dependencia estatal a otra, incluso fuera del país por razones presupuestarias, por períodos de hasta doce meses prorrogables y aún sin la anuencia del empleado siempre que sea dentro de la misma localidad. Este decreto, que fue criticado por la oposición en la Asamblea Legislativa busca, según la opinión de dirigentes laborales, descabezar el movimiento reivindicativo en el sector de los empleados públicos ante el fracaso de los sindicatos paralelos progobernistas. Las protestas alcanzan tal magnitud que el Partido de Conciliación Nacional, que sumó sus votos a la democracia cristiana para su aprobación pidió su derogatoria el 25 de octubre mostrando de nuevo

las profundas contradicciones en el bloque dominante. La ola de huelgas y paros continuará durante el mes de noviembre sobresaliendo las del Ministerio de Hacienda, de la Administración Nacional de Telecomunicaciones y la Municipalidad de San Salvador, provocando incluso pronunciamientos adversos contra el movimiento pero también contra el gobierno por parte de las cámaras patronales, y obteniendo el apoyo de la Unidad Popular Democrática (UPD), quien entra nuevamente en contradicción con el gobierno del cual constituye su principal base de apoyo.

Debe resaltarse la huelga de los empleados de ANTEL, que reclaman, entre otras cosas, la libertad de los hijos de uno de sus dirigentes acusados del secuestro de un coronel de las fuerzas armadas.

El sector agrario reformado también se lanza de nuevo a la protesta al conocerse el anuncio del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), de los precios de compra para la cosecha 85-86 de granos básicos.

El año va a finalizar con importantes hechos: el primero es la exigencia pública hecha por el presidente Duarte el 24 de noviembre a casi 50,000 empleados públicos para deponer la huelga, amenazándolos con aplicar las leyes de seguridad nacional, afirmando que el gobierno no tenía recursos ni para pagar a sus propios empleados. A la vez anunció un aumento en los salarios a partir de enero de un máximo de 40 dólares y un aumento en el aguinaldo de este año para los aproximadamente 150,000 empleados estatales. El 28 del mismo mes termina el paro en el sector público comprometiéndose el gobierno a conceder 21 de los 49 puntos demandados por los trabajadores, amenazando sin embargo con la militarización de los servicios si ello fuera necesario, tal como en el caso de ANTEL.

El segundo es la exigencia salarial planteada e implementada en sus zonas de control e influencia por el FMLN, para la recolección de las cosechas de café, caña y algodón, que supera en más de la mitad a la fijada por el gobierno.

El tercer hecho es el violento ataque contra la política económica en general del gobierno demócrata cristiano por ARENA, agudizando la crisis de hegemonía antes mencionada.

El cuarto es el regreso de Héctor Bernabé Recinos, quizás el dirigente sindical más importante del país, para dirigir el congreso de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), una de las centrales sindicales de mayor peso en El Salvador, a pesar de las amenazas a muerte en contra de él y su reciente liberación de la cárcel.

D. conclusiones

Si en términos generales podemos decir que 1985 es testigo del continua-

do resurgimiento de la lucha de las clases trabajadoras salvadoreñas, debemos señalar, a manera de conclusión, algunos rasgos específicos:

- * respecto a las formas de organización nos encontramos ante un continuo y creativo desarrollo; en el primer trimestre resaltamos la organización de los cooperativistas, que aunque ha seguido el patrón organizacional que los sindicatos han tenido en el país, influenciados por el actual código laboral, lo han hecho al margen de la conducción e influencia del gobierno y las centrales sindicales norteamericanas, es decir, al margen de la UPD y la CID (que sigue prácticamente las orientaciones de la AFL-CIO); vemos también surgir una nueva forma organizativa (esta vez al margen de la actual legislación del trabajo): la Coordinadora de Solidaridad con los Trabajadores (CTS), que agrupa desde sindicatos hasta cooperativas y que constituiría un desarrollo mayor del Movimiento Unitario de Sindicatos y Gremios de El Salvador (MUSYGES), que tuviera un importante papel en las luchas de los 1983 y 1984; los asalariados del Estado han desarrollado por su parte también formas novedosas de trabajo conjunto, expresadas en la creación del Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM).
- ** respecto a las formas de lucha vamos a encontrar que a pesar de la persistente represión (el actual gobierno "democrático" dio una espectacular muestra con el asalto por comandos militares al hospital del Seguro Social para enfrentar a huelguistas desarmados), los trabajadores han tenido que privilegiar necesariamente las formas extraparlamentarias e ilegales según el código de trabajo actual; recordemos que en toda la historia laboral salvadoreña, vale decir desde la década de los años 20, únicamente 3 huelgas han sido declaradas legales y que este año casi 100 trabajadores encabezados por sus directivos fueron destituidos de la ANDA durante el paro que mencionamos en el punto anterior.
- *** en lo que concierne a la dispersión y a la unidad del movimiento podemos observar que la crisis de hegemonía en el seno del bloque dominante ha conducido a una fragmentación en la organización de los trabajadores (sindicatos, gremios y cooperativas), influenciados por la democracia cristiana y las centrales sindicales norteamericanas, mientras que crece la unidad entre las organizaciones que responden a los intereses populares, y particularmente entre las federaciones sindicales de orientación revolucionaria.
- **** por último, en lo que se refiere a las plataformas reivindicativas se mantiene la tendencia iniciada en 1983 de combinar correctamente las demandas de corte económico-salarial con las peticiones de tipo polí-

tico, tanto las referidas a la solidaridad con otros trabajadores (capturas, destituciones, etc.), como las de orden general apoyando la búsqueda de una solución negociada a la guerra popular revolucionaria que vive el país.

Es así como los trabajadores participan activamente en la "Jornada Nacional por el Diálogo y La Paz" que organiza la Universidad de El Salvador del 9 al 13 de diciembre, en la que a la par de las principales organizaciones sindicales, gremiales y cooperativas ("Comité 1º de mayo", COACES, Asociación Salvadoreña de Trabajadores de Telecomunicaciones, FENASIRAS, Asociación de Cooperativas Agropecuarias Integradas, FESIRAS, Comité Coordinador de Trabajadores Universitarios, Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de El Salvador, FESTILAVSCES, Asociación de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Sindicato de Trabajadores de la Lotería Nacional, Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación, ANDES 21 de junio, SEIRAS, Sindicato de trabajadores del INPEP, Sindicato de Trabajadores del ISSS, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Transporte, Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, Confederación General del Trabajo, Central de Trabajadores Salvadoreños, OCTEM, Sindicato de Trabajadores de ANDA, FUSS y UPD), vamos a encontrar a partidos políticos, universidades, asociaciones profesionales, comisiones de derechos humanos, presos políticos y desplazados, trabajadores del arte y la cultura, y hasta asociaciones de empresarios como la Federación de la Pequeña Empresa (FENAPES) y el Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños (CONAES).

La derogatoria en la práctica del decreto # 162, que hubiera permitido al gobierno el descabezamiento de la dirigencia de las organizaciones laborales del sector público, corona un año de continuado reactivamiento de las luchas de los trabajadores salvadoreños.

